

Nuestro lado oscuro



SI DE ALGO DEBIERA SERVIR EL DANTESCO SACRIFICIO DE TANTAS VIDAS HUMANAS ES PARA HACERNOS REFLEXIONAR, COMO SOCIEDAD, ACERCA DE LAS FALLAS QUE TENEMOS EN LA FORMA CÓMO TRATAMOS A NUESTRA GENTE, ESPECIALMENTE A QUIENES SON MÁS VULNERABLES.

LUIS LARRAÍN

Frente a los muros todavía hu- meantes de la Cárcel de San Miguel,

nuestra clase política comenzó el tradicional ejercicio de buscar culpables del macabro incendio, donde perdieron la vida 81 reclusos y varios más quedaron heridos de gravedad.

Ha sido la ocasión, también, para volver a instalar una soterrada lucha ideológica entre quienes se oponen a lo que consideran el encarcelamiento indiscriminado de los delincuentes, y aquéllos que opinan que nuestras calles están aún plagadas de sujetos peligrosos y corresponde, por lo tanto, incrementar la infraestructura carcelaria.

Si de algo debiera servir el dantesco sacrificio de tantas vidas humanas, es para hacernos reflexionar, como sociedad, acerca de las fallas que tenemos en la forma cómo tratamos a nuestra gente, especialmente a quienes son más vulnerables.

La discusión sobre cuál es la proporción de la población total que es razonable estar encarcelada, o cuántos delincuentes conviene que estén reclusos y cuántos deben cumplir penas alternativas, siendo legítima, no debiera determinar las condiciones

en que viven los presos.

Si alguien cree que no es prioridad construir nuevas cárceles, porque así se alienta a nuestro sistema penal a aumentar la población reclusa, simplemente está atentando contra los derechos fundamentales de los reclusos. Está afectando también a todos los chilenos, al reducir a los presos a una condición de tal precariedad, que hace imposible cualquier intento de reinserción de ellos en la sociedad.

No se deben mezclar las cosas; en todo momento las cárceles

deben ser suficientes para albergar, en condiciones razonables, a toda la población penal. Dicho esto, cabe discutir por qué Chile no ha sido capaz de cumplir con esa obligación.

La razón principal, a mi juicio, es la crisis en la gestión del Estado, reflejada en este caso en el deficiente funcionamiento de Gendarmería y en la incapacidad de los gobiernos para invertir y gestionar recursos adecuadamente.

Recién el Ministro Felipe Bulnes, el que más se ha preocupado de la situación en las cárceles durante los últimos veinte años, ha adelantado que el aumento de dotación de Gendarmería es una necesidad que parecía ineludible.

Y no ha sido un problema de recursos,

sino de prioridades. Recordemos que entre 1996 y el 2005 un destacado ministro de la Presidenta Bachelet recibió 25 millones de pesos en honorarios de Gendarmería. Entre los años 2000 y 2003, otro ex ministro de la Concertación recibió más de 23 millones de pesos, siendo público y notorio que no ejercía labores en esa institución, que, igual que otras, fue usada como caja pagadora de favores políticos y no como una entidad al servicio de la política carcelaria.

En materia de inversión, el gran error fue no persistir en las cárceles concesionadas. Con el pretexto de que eran más caras, o basados en problemas de ineficiente gestión de los mandantes, o simplemente por razones ideológicas, se paralizó un programa que a todas luces mejora los estándares

de la reclusión. El Presidente Lagos impulsó al comienzo las concesiones y reclama crédito por ello, pero incumplió su promesa de llegar a 10 cárceles.

Si bien el costo por interno en las cárceles concesionadas es más alto, la ganancia por mejores condiciones de vida y seguridad es mucho mayor. Las cárceles concesionadas tienen en promedio 23,4 metros cuadrados por cada reo, mientras el total del sistema carcelario es de 6,4 metros por reo.

Las cárceles concesionadas son fiscalizadas periódicamente, se revisan sus medidas de seguridad, la calidad de la alimentación y la infraestructura. Tienen a los reos segregados, en celdas individuales o de a dos o tres personas.

¿Hubiera ello evitado una tragedia como la de San Miguel? No lo sabemos, pero probablemente sí, dados los altos estándares de seguridad, la ausencia de hacinamiento y la mejor calidad de vida de los internos.

Es que este país, que a veces creemos tan desarrollado y exitoso, arrastra aún una pesada crisis en la gestión del Estado que, de una vez por todas, hay que enfrentar. ■